

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL INFORME N° 66/12

CASO 12.324
RUBÉN LUIS GODOY
(Argentina)

I. Resumen del caso

Víctima (s): Rubén Luis Godoy

Peticionario (s): Guido Laman, Marcela J. de Luca, Sergio Di Gioia

Estado: Argentina

Informe de Fondo N°: 66/12, publicado el 29 de marzo de 2012

Informe de Admisibilidad N°: 04/04, Publicada el 24 de febrero de 2004

Temas: Deber de Adoptar Medidas y Disposiciones de Derecho Interno / Derecho a la Integridad Personal / Garantías judiciales / Presunción de Inocencia / Protección Judicial / Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes

Hechos: El caso se refiere a la condena del señor Rubén Luis Godoy a la pena de prisión perpetua y al pago de una indemnización de noventa mil pesos el 22 de diciembre de 1994, como autor de los delitos de tentativa de violación y homicidio calificado en concurso real, en un proceso en que se habían violado sus garantías judiciales. En particular, el señor Godoy fue coaccionado para extraer una confesión falsa, la cual fue determinante en la sentencia condenatoria. Pese a que estos hechos fueron denunciados al tribunal, éste no inició una investigación, y el señor Godoy no tuvo acceso a un recurso que revisara su sentencia condenatoria.

Derechos violados: La Comisión concluyó que el Estado de Argentina no investigó debidamente la denuncia de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes que hizo el señor Godoy, en violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 en relación con el artículo 5.1 de la Convención Americana. Asimismo, concluyó que la confesión que el señor Godoy hizo bajo alegatos de haber sido obtenida bajo tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, fue utilizada por los tribunales de justicia en su proceso penal, en violación del artículo 8.3 de la Convención. En adición, la CIDH concluyó que el señor Godoy no tuvo acceso a un recurso judicial que hiciera una revisión de los elementos de hecho, de derecho y valoración y recepción de la prueba que ponderó el tribunal de única instancia, en violación de lo dispuesto por el artículo 8.2.h) y artículo 2 de la Convención, todos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, concluye *iura novit curiae*, que el Estado violó los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de Rubén Luis Godoy.

II. Recomendaciones

Recomendaciones	Estado de cumplimiento en el 2021
1. Disponer las medidas necesarias para que el recurso interpuesto por la defensa de Rubén Luis Godoy con el fin de obtener una revisión amplia de la sentencia condenatoria se resuelva en cumplimiento del artículo 8.2.h) de la Convención Americana, con exclusión de cualquier prueba obtenida bajo coacción, en los términos del artículo 8.3 de dicho instrumento.	Cumplimiento total ¹
2. Completar la investigación penal dirigida a esclarecer la denuncia de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes hecha por Rubén Luis Godoy, a la mayor brevedad y de manera efectiva e imparcial.	Cumplimiento parcial
3. Disponer las medidas legislativas y de otra índole para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de conformidad con los estándares descritos en el presente informe.	Cumplimiento total

¹ CIDH, Informe Anual 2018, [Capítulo II, Sección G: Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH](#), párr. 219.

4. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como moral.	Cumplimiento total ²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

III. Actividad Procesal

1. El 27 de agosto de 2015, la Comisión sostuvo una reunión de trabajo con las partes en la ciudad de Buenos Aires, durante una visita de trabajo de la CIDH realizada a Argentina del 24 al 27 de agosto.

2. En 2021, la CIDH solicitó al Estado información actualizada sobre el cumplimiento de recomendaciones el 16 de agosto. El Estado solicitó una prórroga el 18 de octubre de 2021. A la fecha del cierre de este informe, el Estado no había proporcionado la información solicitada.

3. La CIDH solicitó a los peticionarios información actualizada sobre el cumplimiento de recomendaciones el 16 de agosto de 2021. El 26 de octubre de 2021, la parte peticionaria proporcionó esta información.

IV. Análisis relativo a la información proporcionada

4. La Comisión considera que la información proporcionada por la parte peticionaria en 2021 es relevante para actualizar el seguimiento del caso puesto que se refiere a medidas de cumplimiento de al menos una de las recomendaciones incluidas en el Informe de Fondo N° 66/12.

5. En 2021, el Estado no proporcionó información a la Comisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo N° 66/12.

V. Análisis del cumplimiento de las recomendaciones

6. **Respecto de la segunda recomendación**, el 6 de abril de 2011, el fiscal a cargo de la Fiscalía N° 8 de la Ciudad de Rosario solicitó el desarchivo de la causa y la realización de una serie de diligencias probatorias. A consecuencia de ello, el 15 de abril de 2011, el Juzgado en lo Penal de Instrucción correspondiente dispuso revocar la resolución de archivo de la causa, y ordenó la producción de prueba testimonial y documental. Durante la reunión de trabajo sostenida entre las partes el 27 de agosto de 2015, el Estado explicó que debido al trascurso del tiempo la resolución de la causa se había hecho dificultosa. Informó que el personal policial que trasladó a la víctima había sido identificado y que el médico forense no pudo constatar si la víctima había sido golpeada. El Estado informó en 2018 que el Juzgado en lo Penal de Instrucción N°. 2 de la Ciudad de Rosario arbitró los mecanismos necesarios a fin de obtener la declaración testimonial del testigo principal sobre los hechos alegados. El Estado expresó que dichas medidas se han visto dificultadas debido al delicado estado de salud del nombrado y puesto que éste reside en la ciudad de Piriápolis, Uruguay.

7. En 2015, durante la reunión de trabajo realizada el 27 de agosto, la parte peticionaria indicó que la Defensoría General se constituyó en querellante en la causa de apremios ilegales y que pidió una serie de medidas provisionales, las cuales fueron diferidas³.

8. En 2019, los peticionarios indicaron que en informe publicado el 22 de abril de 2019, el Juez Letrado del Departamento de Maldonado Darwin Rampoldi Robaina informó que el Señor Mario Alberto Duera no había comparecido a la audiencia para dar su testimonio y que la autoridad requirente no había autorizado la conducción de la persona. Para los peticionarios, es de extrema importancia llevar a cabo la declaración testimonial, como última medida a producir, a los fines de encausar la investigación penal, puesto

² CIDH, [Caso 12.324. Rubén Luis Godoy. Informe de Fondo N°. 66/12](#), párr. 199.

³ CIDH, Informe Anual 2017, [Capítulo II, Sección F: Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH](#), párr. 264.

que el Ministerio Público hizo saber que es su intención dar fin a la investigación ante la eventual posibilidad de haber operado la extinción de la acción penal por prescripción.

9. En 2021, la parte peticionaria informó que el Estado todavía no ha practicado la declaración del testigo principal de los hechos, a pesar de que esto fue solicitado desde hace 7 años. La parte peticionaria indicó que, aunque en 2019 hubo posibilidad de materializar esta medida, la pandemia por el Covid-19 dilató el cumplimiento de la solicitud.

10. En 2020, el Estado presentó información que reitera datos y argumentos presentados en años anteriores.

11. La CIDH agradece la información presentada por la parte peticionaria. Sin embargo, ante la ausencia de información proporcionada que indique algún avance en el cumplimiento de esta recomendación, la CIDH invita al Estado a proporcionar información que dé cuenta del desarrollo de la investigación penal por los hechos de este caso. A la espera de esta información, la Comisión considera que la segunda recomendación continúa parcialmente cumplida.

12. Respecto de la tercera recomendación, en su comunicación de 2019, los peticionarios informaron que en el caso de las medidas legislativas ordenadas por la Comisión en el Informe N° 66/12, éstas se habrían ejecutado de forma sustancial por lo que resultó innecesario habilitar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los peticionarios no aportaron información adicional o detallada sobre las medidas adoptadas por el Estado para avanzar en el cumplimiento de esta recomendación.

13. En 2021, la parte peticionaria consideró que fue positiva la modificación realizada al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe considerando que respeta los estándares fijados en el Informe de Fondo N° 66/12 e introduce los principios de oralidad, contradicción, publicidad, inmediatez, simplificación y celeridad en las investigaciones y procesos penales. Según la parte peticionaria, esta reforma introdujo un sistema acusatorio material similar a los diseños anglosajones que introdujo cambios que impactaron todas las etapas del proceso penal y que desarrolló los medios de impugnación propios de los sistemas adversariales orales. Además, la parte peticionaria manifestó que con esta reforma se instauró una doctrina de recursos respecto del imputado e implementó las disposiciones internacionales incorporadas por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina. Con esto, en criterio de la parte peticionaria, se consagró una nueva garantía que implica la facultad del imputado de solicitar la revisión de una decisión judicial adversa.

14. La CIDH agradece la información presentada por la parte peticionaria y saluda los avances reportados en el sentido de que la modificación al Código Procesal Penal de Santa Fe significó la implementación del contenido del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Particularmente, la Comisión considera lo afirmado por la parte peticionaria en el sentido de que esta reforma permitió la introducción de un sistema penal que respeta las garantías judiciales frente a procesos penales y decisiones judiciales adversas. En vista de la información recibida, la Comisión observa que se ha aportado información relevante para actualizar el estado de cumplimiento de esta recomendación y considera que el nivel de dicha recomendación es total.

VI. Nivel del cumplimiento del caso

15. Por lo anterior, la Comisión concluye que el nivel de cumplimiento del caso es parcial. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando el cumplimiento de la recomendación 2.

16. La Comisión insta al Estado seguir adoptando las acciones necesarias para completar la investigación penal, y proporcionar información actualizada y detallada sobre dichas acciones a la CIDH.

VII. Resultados individuales y estructurales del caso

17. En esta sección se destacan los resultados individuales y estructurales del caso informados por las partes.

A. Resultados individuales del caso

Medidas de restitución en el ejercicio del derecho

- Mediante Resolución de 22 de julio de 2011 el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Coronda concedió la libertad condicional a Rubén Luis Godoy, en virtud de un recurso interpuesto por sus representantes, la Defensoría Nacional de Cámaras, por haber cumplido más de 2/3 partes de su pena.
- Mediante el Decreto No. 2794/11 del Poder Ejecutivo Provincial se conmutó la pena de prisión perpetua a la que fuera condenado Rubén Luis Godoy a una pena equivalente al tiempo de ejecución de la pena que llevaba cumplida al día de la emisión de dicho decreto, que era el 1 de diciembre de 2011.
- El 24 de septiembre de 2013 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario declaró el sobreseimiento de Rubén Luis Godoy por haber operado la prescripción de la acción penal.

Medidas de compensación pecuniaria

- Mediante Resolución No. 163-D de fecha 22 de diciembre de 2011 el Procurador general de la Provincia de Santa Fe autorizó el pago de la suma de \$40,000 (pesos argentinos) al señor Rubén Luis Godoy como reparación exclusivamente de los daños generados por la conculcación del derecho a acceder oportunamente a un recurso judicial que hiciera revisión con los alcances sentados en el Informe de Fondo N° 66/12.

B. Resultados estructurales del caso

Legislación/Normativa

- Adopción e implementación del nuevo Código Procesal Penal (Ley 12.912) de la Provincia de Santa Fe aprobado el 7 de octubre de 2008. Esta normativa permitió la implementación de un sistema penal acusatorio que se basa en la aplicación de principios de oralidad, celeridad, publicidad, inmediatez y contradicción.